

INFORME SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA 2020

Resumen ejecutivo

La Constitución garantiza la libertad religiosa y prohíbe la discriminación por motivos religiosos. Afirma que, aunque ninguna confesión tendrá “carácter estatal”, los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. El Estado tiene acuerdos bilaterales con la Santa Sede que conceden a la Iglesia Católica ventajas no reconocidas a los otros tres grupos con los que mantiene acuerdos: protestantes, musulmanes y judíos. Los grupos sin acuerdos pueden inscribirse en el registro del Gobierno y recibir ciertas ventajas. En enero, el Gobierno traspasó la competencia en cuestiones religiosas del Ministerio de Justicia al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Ministerio de la Presidencia). Varios grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales (ONG) expresaron su satisfacción con la iniciativa, manifestando que las cuestiones religiosas habían cobrado importancia gracias a esta reestructuración. En julio, Amnistía Internacional instó al Gobierno a despenalizar la “ofensa de sentimientos religiosos” por considerarla una limitación indebida de la libertad de expresión. Algunos grupos religiosos y ONG expresaron su preocupación sobre las restricciones impuestas por el Gobierno en lugares de culto durante la pandemia de la COVID-19. Varias minorías religiosas objetaron un trato jurídico desigual, en comparación con la Iglesia Católica, en cuestiones como la asignación tributaria, el acceso a cementerios, la financiación pública y las pensiones del clero. Hubo algunos miembros del Parlamento y de gobiernos locales que emplearon lenguaje despectivo contra minorías religiosas. La Fundación Pluralismo y Convivencia, del sector público estatal, continuó los contactos con varios grupos religiosos y organizó eventos para promover la libertad religiosa. La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior prestó asistencia a las víctimas de delitos de odio por motivos religiosos y ofreció formación a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La ONG Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) informó de 181 incidentes por motivos religiosos —entre ellos dos agresiones— en los nueve primeros meses del año, seis más que en el mismo periodo de 2019; el 75 por ciento de ellos contra cristianos. El Ministerio del Interior registró 66 delitos de odio por motivos religiosos en 2019, en comparación con los 69 de 2018. De acuerdo con la Memoria Anual de 2019 de la Fiscalía General del Estado, durante ese año se incoaron siete procedimientos judiciales por delitos de odio relacionados con la religión y se dictaron dos sentencias por delitos contra los sentimientos religiosos. Varios cristianos, musulmanes y judíos denunciaron un aumento de la hostilidad hacia ellos en redes sociales y un incremento de los actos de vandalismo.

Funcionarios de la Embajada y del Consulado de Estados Unidos mantuvieron una comunicación regular con la Subdirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, así como con las oficinas de asuntos religiosos de los gobiernos autonómicos. Entre otros, hablaron del acceso a las licencias para los lugares de culto, la educación religiosa, los cementerios y los enterramientos, las pensiones, los delitos de odio por motivos religiosos y el discurso de odio.

Funcionarios de la Embajada y del Consulado se reunieron con un amplio número de grupos religiosos y miembros de la sociedad civil para debatir sobre la discriminación y el libre ejercicio de sus derechos religiosos. La Embajada y el Consulado publicaron mensajes en redes sociales conmemorando diversas fiestas y celebraciones religiosas y destacaron la importancia de la libertad de culto y de la inclusión y el respeto hacia las comunidades religiosas minoritarias. En enero, funcionarios de la Embajada copatrocinaron varios eventos en conmemoración del Mes de la Memoria del Holocausto.

Sección I. Demografía religiosa

El Gobierno de Estados Unidos estima que la población total de España es de 50 millones de habitantes (a mediados de 2020). Según un sondeo realizado en septiembre por el organismo público Centro de Investigaciones Sociológicas, el 59,2 por ciento de los encuestados se identificaron como católicos y el 2,7 por ciento, como fieles de otras confesiones. Además, el 10,6 por ciento se describieron como “no creyentes”, el 11,8 por ciento como agnósticos y el 13,6 como ateos; el 2 por ciento restante no contestó la pregunta.

La Conferencia Episcopal Española (CEE, católica) había estimado anteriormente que hay 32,6 millones de católicos; y no ha publicado cálculos más recientes. La Comisión Islámica de España (CIE) estima que hay 1,95 millones de musulmanes. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) calcula que hay 1,5 millones de protestantes, de los cuales la mayoría son inmigrantes. La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) estima que hay entre 40.000 y 45.000 judíos; la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal, una organización que reúne a varias iglesias ortodoxas, afirmó en 2014 que había 1,5 millones de cristianos ortodoxos; los Testigos de Jehová comunican entre 120.000 y 150.000 miembros; la Unión Budista de España, Federación de Entidades Budistas de España (UBE-FEBE) calcula que hay 100.000 budistas; y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia de Jesucristo) señala cerca de 60.000 miembros. Existen otros grupos religiosos como la ciencia cristiana, otros grupos cristianos, el bahaísmo (12.000 miembros), la cienciología (11.000 miembros) y el hinduismo. El mayor porcentaje de no cristianos se encuentra en las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y Madrid y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, situadas al norte de África, alcanzando casi el 50 por ciento en estas dos últimas (en su mayoría musulmanes).

Sección II. Respeto de la libertad religiosa por parte de los gobiernos

Marco Legal

La Constitución prohíbe la discriminación por razones religiosas y establece la libertad religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Además, establece que nadie

podrá ser obligado a declarar sobre su religión o creencias. Y añade que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. La Iglesia Católica es el único grupo religioso mencionado explícitamente en la Constitución. Según el Código Penal, es delito impedir o perturbar los servicios religiosos, así como ofender o hacer escarnio de las creencias y ceremonias religiosas o de quienes las profesan o practican. La Constitución permite limitar la libertad de las manifestaciones religiosas si resulta “necesario para mantener el orden público”.

La legislación impone penas de multa de ocho a doce meses a quienes, con el fin de ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen públicamente a quienes la profesan o practican. E incurrirán en las mismas penas los que hagan públicamente escarnio de quienes no profesan religión o creencia alguna. Además, la legislación castiga con penas de prisión de seis meses a un año o con multa a quienes ejecuten “actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados” en un lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas.

La definición de los delitos de odio en el Código Penal incluye los actos de “humillación y menosprecio” hacia personas por motivos referentes a su religión, y los castiga con penas de uno a cuatro años de prisión. El antisemitismo está expresamente definido en el Código Penal como un delito de odio. Según la ley, las autoridades pueden investigar y procesar como “delitos terroristas” los delitos cometidos por grupos neonazis. La negación del genocidio se considera delito si incita a actitudes violentas, como comportamientos o lenguaje hostiles e intimidatorios. La legislación también contempla la emisión de una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura franquista sufrieron violencia o padecieron persecuciones por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa.

El Estado no exige que los grupos religiosos se inscriban en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de la Presidencia, pero estar inscritos les otorga ciertas ventajas legales. Los grupos inscritos pueden adquirir, arrendar y vender propiedades, y actuar como entidades jurídicas en procesos civiles. La inscripción implica la cumplimentación de los formularios disponibles en la página web del Ministerio de la Presidencia y la presentación de documentación en escritura pública que incluya la erección canónica de la entidad, sus estatutos, representantes legales, ámbito territorial, fines religiosos y domicilio. Cualquier persona o grupo tiene derecho a practicar su religión esté o no dada de alta como entidad religiosa.

La inscripción en el registro del Ministerio de la Presidencia y el notorio arraigo permiten que los grupos establezcan acuerdos bilaterales de cooperación con el Estado. El Estado mantiene un acuerdo bilateral con la Santa Sede, puesto en práctica en parte por la Conferencia Episcopal Española, quien representa a toda la comunidad católica ante el Estado. Según uno de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, las diócesis y parroquias católicas no están obligadas a inscribirse en el registro estatal. La Iglesia Católica es la única entidad religiosa a la que los ciudadanos pueden

destinar voluntariamente el 0,7 % de sus impuestos. El Estado también tiene acuerdos de cooperación con la CIE, la FCJE y la FEREDE. Los mencionados acuerdos con las cuatro religiones mayoritarias del país —catolicismo, islam, protestantismo y judaísmo— son legalmente vinculantes y conceden a los grupos religiosos ciertas exenciones fiscales, así como capacidad para adquirir y vender propiedades, abrir un lugar de culto y realizar otros actos jurídicos. Además, dan validez civil a los matrimonios celebrados por sus ritos y les permiten tener profesores en los centros escolares y capellanes en los hospitales, las Fuerzas Armadas y las prisiones. Los grupos con acuerdos de cooperación también tienen derecho a recibir subvenciones públicas administradas independientemente. Los acuerdos abarcan asuntos legales, educativos, culturales y económicos; la práctica religiosa por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas; y el servicio militar de los clérigos y miembros de las órdenes religiosas.

Los grupos inscritos que desean firmar acuerdos de cooperación con el Estado deben tener reconocido el estatus de notorio arraigo por parte del Ministerio de la Presidencia. Para ello deben contar con un número de miembros “relevante” sin especificar, llevar presentes en el país al menos treinta años y tener un “nivel de difusión” que el ministerio considere que acredita una “presencia en la sociedad”, pero que no está más definido. Además, los grupos deben presentar documentación que acredite su naturaleza religiosa ante la Subdirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, que gestiona el Registro de Entidades Religiosas. Los Testigos de Jehová, la UBE-FEBE, la Iglesia de Jesucristo y la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal son entidades inscritas con estatus de notorio arraigo. Las nuevas comunidades religiosas pueden darse de alta directamente en el Ministerio de la Presidencia, o bien pueden hacerlo en su nombre las asociaciones religiosas.

Si el Ministerio de la Presidencia considerara que un solicitante de inscripción no es un grupo religioso, dicho grupo podrá ser incluido en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. La inscripción en dicho registro concede personalidad jurídica, pero no ofrece otras ventajas; simplemente supone la inclusión de la asociación y su historia en la base de datos del Estado. La inscripción como asociación es un paso previo para solicitar la declaración de utilidad pública, lo cual proporciona las mismas ventajas fiscales que a las organizaciones benéficas, como la exención del impuesto sobre la renta y los impuestos sobre las aportaciones. Para ser declarada como tal, la asociación debe llevar inscrita dos años y tener un patrimonio neto positivo.

La Fundación Pluralismo y Convivencia es una entidad pública perteneciente al Ministerio de la Presidencia que promueve la libertad y diversidad religiosas. Proporciona financiación para apoyar actividades de promoción de la integración cultural, educativa y social entre las confesiones religiosas no católicas que tienen un acuerdo de cooperación con el Estado, así como ayuda no económica a otros grupos religiosos inscritos en el registro estatal con el fin de aumentar la concienciación pública. La fundación también fomenta el diálogo y el acercamiento entre los grupos religiosos y la integración de la religión en la sociedad. Colabora estrechamente con la Subdirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia.

El Estado financia los servicios religiosos dentro del sistema penitenciario para los grupos católicos y musulmanes. Entre dichos servicios se incluyen la misa dominical y la confesión católicas y la oración del viernes islámica. Los respectivos acuerdos de cooperación de la FCJE y la FEREDe con el Estado no incluyen esta disposición; dichos grupos proporcionan servicios religiosos en las prisiones, pero a sus expensas. El resto de grupos inscritos como entidades religiosas ante el Ministerio de la Presidencia pueden proporcionar servicios a sus expensas durante las horas de visita a petición del recluso.

El Gobierno garantiza el acceso del personal religioso de grupos con acuerdos de cooperación con el Estado a los centros de solicitantes de asilo y refugiados para que proporcionen, a sus expensas, asistencia directa a sus fieles. El personal religioso de grupos sin acuerdos de cooperación con el Estado puede acceder a los centros de internamiento previa solicitud al Ministerio de la Presidencia.

El reglamento militar y los acuerdos de cooperación firmados con el Estado permiten la celebración de funerales militares religiosos y servicios de personal religioso para católicos, protestantes, judíos y musulmanes si lo solicita la familia del fallecido. El resto de grupos religiosos pueden celebrar funerales religiosos si se solicita.

El Estado reconoce los matrimonios de todas las confesiones de notorio arraigo. Los miembros de los grupos religiosos sin dicho estatus han de contraer matrimonio en una ceremonia civil.

Las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña mantienen acuerdos con varios grupos religiosos que también tienen acuerdos con el Gobierno central. Los acuerdos autonómicos permiten actividades como la asistencia religiosa en los hospitales y las prisiones bajo jurisdicción autonómica. El Gobierno central financia estos servicios en las prisiones y Fuerzas Armadas, y los gobiernos autonómicos financian los servicios en los hospitales. Según el Gobierno central, los acuerdos con los gobiernos autonómicos no pueden contradecir los principios de los acuerdos estatales, que prevalecen.

Los grupos religiosos deben solicitar a los gobiernos locales una licencia de apertura para los lugares de culto, al igual que en el caso de otros establecimientos para uso público. Los requisitos para dicha licencia varían de un municipio a otro. La documentación necesaria es la misma que para la apertura de un local de uso público por parte de un establecimiento comercial e incluye información tal como los planos o la capacidad máxima. Los grupos religiosos también deben informar al Ministerio de la Presidencia de la apertura de nuevos lugares de culto.

Los gobiernos locales están obligados a examinar las solicitudes de uso de terreno público para la apertura de un lugar de culto. Si un municipio decide denegar una solicitud, tras sopesar factores como la disponibilidad y el valor añadido para la comunidad, el ayuntamiento deberá explicar su decisión al solicitante.

Tal como se explica en los acuerdos de cooperación con los grupos religiosos, los gobiernos proporcionan financiación para los salarios de los profesores que imparten las clases de educación religiosa católica en centros escolares públicos; y, si la

solicitan un mínimo de diez alumnos, también para la protestante o islámica. La comunidad judía también tiene derecho a recibir financiación pública para los

profesores judíos, pero la ha rechazado. Estas clases no son obligatorias. Los alumnos que optan por no cursar la asignatura de religión deben cursar una asignatura alternativa que incluye temas sociales, culturales y religiosos de carácter general. El desarrollo de los planes de estudio y la financiación de los profesores de religión es responsabilidad de los gobiernos autonómicos, excepto en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde los planes de estudio y la financiación son competencia del Gobierno central, según sus respectivos estatutos de autonomía.

En general, las comunidades autónomas tienen competencia para establecer los requisitos que han de cumplir los profesores de educación religiosa y certificar sus cualificaciones, aunque algunas optan por delegarlo al Gobierno central. Por ejemplo, los candidatos a profesores deben facilitar sus datos personales, demostrar que no han sido despedidos por la autoridad educativa de la comunidad autónoma en la que solicitan trabajo, poseer un título según lo exigido por la comunidad autónoma y cualquier otro requisito establecido por la asociación religiosa correspondiente. Las asociaciones religiosas deben proporcionar al Gobierno una lista de los profesores autorizados. Las directrices de la CIE aprobadas por el Ministerio de Educación subrayan el “islam moderado” en las prácticas de culto, con énfasis en el pluralismo, el entendimiento, la tolerancia religiosa, la resolución de conflictos y la convivencia. La CIE también exige que los profesores tengan un certificado de formación en educación islámica. Los centros escolares privados, estén o no financiados con fondos públicos, deben cumplir los requisitos de las leyes educativas estatales. Los centros escolares privados de carácter religioso que no reciben financiación pública deben, además, obtener una autorización de la administración educativa autonómica para su apertura y funcionamiento.

Los miembros del clero católico y judío pueden incluir el tiempo dedicado a misiones en el extranjero en los cálculos de la Seguridad Social y solicitar el reconocimiento para la pensión de jubilación por un máximo de 38,5 años de servicio. El clero protestante tiene derecho a percibir prestaciones de la Seguridad Social, como cobertura sanitaria y una pensión de jubilación por parte del Estado por un máximo de 15 años de servicio, aunque los requisitos para tener derecho a una pensión son más estrictos que para los miembros del clero católico. El clero musulmán, ortodoxo y de los Testigos de Jehová también tiene derecho a las prestaciones de la Seguridad Social según los términos de los distintos acuerdos negociados con el Estado al respecto por cada uno de estos grupos.

España forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Prácticas del Gobierno

El 16 de julio, Amnistía Internacional instó al Gobierno a reformar la parte del Código Penal que tipifica la ofensa de los “sentimientos religiosos”, por considerar que

limitaba indebidamente la libertad de expresión. Durante el año se procesaron varios casos de delitos contra los sentimientos religiosos.

En junio, la Asociación Española de Abogados Cristianos se unió a otros ocho demandantes (la Conferencia Episcopal Española, el Centro Europeo de Derecho y Justicia, la Conferencia Episcopal de Eslovaquia y otras cinco organizaciones cristianas) para presentar una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que el Gobierno había vulnerado la libertad religiosa de los cristianos por no protegerlos contra los discursos de odio y por financiar con fondos públicos una exposición de arte que ofendía los sentimientos religiosos. La causa estaba relacionada con la denuncia por ofensa de los sentimientos religiosos que presentó la Asociación Española de Abogados Cristianos contra Abel Azcona, quien en 2015 mostró en una exposición fotográfica la palabra “pederastia” escrita con hostias consagradas. En octubre de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite la demanda después de que un juzgado de instrucción de Pamplona archivara la causa y el Tribunal Constitucional nacional no admitiera a trámite el recurso de amparo.

En octubre, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querrela presentada por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en la que acusaban a las fuerzas de seguridad del Estado, bajo la supervisión del ministro, por la entrada en iglesias y suspensión de misas en diferentes lugares del país durante el periodo de confinamiento a raíz del estado de alarma decretado del 14 de marzo al 20 de junio a causa de la COVID-19, a pesar de que las iglesias cumplían el límite de capacidad y las medidas sanitarias exigidas por el Gobierno. En abril, el OLRC envió una carta a Grande-Marlaska expresando su malestar ante las suspensiones o interrupciones de actos religiosos durante la Cuaresma y la Semana Santa en diferentes puntos del país, asegurando que esos hechos vulneraban la libertad religiosa y pidiendo explicaciones al Gobierno.

Representantes de la FEREDE expresaron su malestar acerca de las limitaciones de capacidad y otras restricciones en lugares de culto y dijeron que el Gobierno no había dado suficientes explicaciones acerca de las medidas adoptadas. Por ejemplo, el Ejecutivo impuso restricciones para cantar en iglesias, y representantes de la FEREDE manifestaron que los cánticos son una parte importante del acto de culto de los protestantes.

El 4 de marzo, los nietos de Francisco Franco demandaron al Gobierno ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la exhumación en octubre de 2019 de los restos del dictador de la Basílica del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en un cementerio al norte de Madrid pese a que la familia Franco insistía en que los restos mortales se trasladaran a una catedral en vez de a un cementerio. Los herederos de Franco alegaban que la exhumación y la sentencia del Tribunal Supremo que lo permitía vulneraban el derecho a la vida privada y familiar, la prohibición de discriminación y el derecho a un proceso equitativo. El OLRC había declarado anteriormente que no consideraba que retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos constituyera un ataque a la libertad religiosa. A finales de año, el Tribunal

Europeo de Derechos Humanos aún no se había pronunciado sobre la admisión a trámite de la demanda.

El 12 de enero, el Gobierno central anunció en el Boletín Oficial del Estado, en el marco de la constitución del nuevo Ejecutivo al mando del presidente Pedro Sánchez, que iba a transferir las competencias sobre libertad religiosa y registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia al Ministerio de la Presidencia, que ostenta Carmen Calvo. La reorganización trasladó al Ministerio de la Presidencia tanto la Fundación Pluralismo y Convivencia como las competencias atribuidas a la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones. Representantes de ambas entidades manifestaron que el cambio era un reflejo del carácter multidisciplinar de su trabajo y añadieron que las entidades religiosas inscritas estaban satisfechas con la iniciativa. Varios grupos religiosos y organizaciones en defensa de la libertad religiosa se manifestaron conformes con la iniciativa del Ministerio de la Presidencia, recalcando que contribuía a resaltar la importancia de las cuestiones religiosas.

En su nueva función de control de asuntos religiosos, la vicepresidenta Carmen Calvo accedió a reunirse con todas las entidades religiosas del país con estatus de notorio arraigo. El 24 de junio, Calvo se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, cardenal y arzobispo de Barcelona. El 22 de julio, procedió a reunirse con representantes de la CIE, la FCJE y la FEREDE, los tres grupos religiosos minoritarios con acuerdos de cooperación con el Estado. El 23 de julio, recibió a representantes de la UBE-FEBE, Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo, tres de las confesiones de notorio arraigo, pero que no tienen acuerdos de cooperación. Por último, el 15 de diciembre, la ministra se reunió con representantes de la Iglesia Ortodoxa griega, rumana y rusa, la confesión restante con estatus de notorio arraigo. Según la Subdirección General de Libertad Religiosa, era la primera vez que se celebraban encuentros a este nivel entre un miembro del Gobierno y las confesiones de notorio arraigo sin acuerdos de cooperación. La comunidad bahá'í de España, que lleva intentando desde 2010 cumplir los requisitos para obtener el estatus jurídico de notorio arraigo, no participó. La Subdirección General de Libertad Religiosa también añadió que la vicepresidenta había iniciado conversaciones técnicas con la Iglesia Católica para resolver cuestiones pendientes no precisadas y que planeaba iniciar conversaciones similares con cada confesión de notorio arraigo.

Varios grupos religiosos, incluidos los protestantes y judíos, valoraron positivamente que el rey Felipe VI rindiera homenaje en una ceremonia civil celebrada el 16 de julio a los 30.000 fallecidos hasta entonces a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 en España. En el pasado, algunos grupos habían manifestado que este tipo de eventos solían ser de carácter religioso, concretamente católico.

Algunos grupos religiosos no católicos afirmaron haber recibido un trato jurídico desigual por parte del Gobierno, y varios de ellos se lo hicieron llegar a la vicepresidenta Calvo. Representantes de la FEREDE manifestaron que pese a que la sentencia de Tribunal Supremo de 2017 estableció que los requisitos para que los ministros protestantes accedan a una pensión del Estado son los mismos que para los sacerdotes católicos, ningún ministro protestante había comenzado aún a percibir una

pensión estatal, ya que la sentencia no tenía carácter retroactivo. El Gobierno no aprobó un Real Decreto, tal como solicitó la FEREDE, para que los ministros protestantes jubilados cobren una pensión por su tiempo de servicio anterior a 1999 y para conceder prestaciones de supervivencia a sus cónyuges e hijos.

La Iglesia Católica seguía siendo la única entidad religiosa a la que los ciudadanos podían destinar voluntariamente el 0,7 % de sus impuestos. Ningún otro grupo religioso figuraba como posible destinatario de fondos en el formulario de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Varios grupos religiosos, entre ellos los protestantes, los musulmanes, los budistas y la Iglesia de Jesucristo, continuaron expresando su deseo de ser incluidos en dicho formulario; y diversos grupos calificaron el sistema como jurídicamente discriminatorio. Manifestaron que preferían recibir aportes voluntarios de contribuyentes sin requisitos previos en vez de depender de la financiación de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que establece condiciones específicas para el uso de sus fondos. Un tercio de los españoles decidió asignar parte de sus impuestos a la Iglesia Católica en 2019, lo cual supuso un total de 286 millones de euros (350,92 millones de dólares), un incremento en las donaciones del 6,19 por ciento en comparación con 2018, según los medios de comunicación.

La FEREDE, la CIE y la FCJE dependieron de fondos estatales facilitados a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia para cubrir sus gastos administrativos y de infraestructura. El Ministerio de la Presidencia siguió asignando fondos a diferentes grupos en función del número de entidades inscritas en el registro y el número aproximado de fieles. Además de para gastos administrativos y de infraestructura, los fondos de la Fundación Pluralismo y Convivencia también se utilizaron para costear pequeños proyectos publicitarios y de investigación. Varios grupos religiosos informaron de dificultades económicas debido a la COVID-19, ya que muchos de sus miembros no pudieron mantener el mismo nivel de donaciones que en años anteriores. La FEREDE solicitó al Gobierno prestaciones de desempleo para sus ministros de culto, pero aseguran no haber recibido respuesta. Representantes de la FEREDE afirmaron que la falta de apoyo económico para sus pastores subrayó el trato desigual entre el clero protestante y católico; los salarios de los primeros los pagan las iglesias protestantes, mientras que los salarios de los últimos provienen del Estado.

La FEREDE también comentó otras medidas que a su juicio constituían un trato desigual, como las visitas del clero católico financiadas con fondos públicos para prestar servicios religiosos en hospitales, instalaciones militares y prisiones, mientras que el clero protestante ha de sufragar los gastos de sus visitas. La CIE también expresó su malestar por que los imanes no recibieran financiación pública para asistir a los fieles en los hospitales.

Varios grupos religiosos citaron los continuados obstáculos para impartir educación religiosa y la integración de los profesores de religión en los centros escolares. La FEREDE comunicó que seguía a la espera de recibir la aprobación oficial para ofrecer un máster de enseñanza religiosa evangélica dos años después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

Durante el curso académico 2020-21 se empezaron a impartir por primera vez asignaturas de religión islámica en las Islas Baleares y en Cataluña, en diez y ocho centros escolares respectivamente. En septiembre, la CIE se reunió con el consejero de Educación de La Rioja, que se comprometió a incrementar el número de colegios donde se imparte religión islámica. En febrero, la CIE se reunió con el concejal de Cultura de Ceuta y con el Instituto Cervantes para empezar a ofrecer clases de lengua española a los imanes de la ciudad autónoma situada al norte de África, con el fin de que puedan dar sermones bilingües a los musulmanes hispanoparlantes. En noviembre de 2019, la CIE expresó su malestar por que no hubiera clases de religión islámica en los centros escolares de seis comunidades: Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia y Navarra. Y añadió que en algunos casos se debía a decisiones de las autoridades locales o a la falta de demanda.

No se impartieron clases de religión judía en escuelas públicas porque no se llegó al límite de 10 alumnos interesados requerido para solicitarlas, según la FCJE. Responsables de la FCJE afirmaron que no consideraban que la falta de clases de religión judía fuera un problema, ya que hay disponible formación religiosa privada para la comunidad judía. La FCJE informó de que generalmente los centros no tenían conocimiento de las fiestas judías contempladas en el acuerdo entre la FCJE y el Estado. En 2018, la Iglesia de Jesucristo propuso que el derecho a la educación religiosa en los centros docentes públicos se concediera a todos los grupos religiosos con notorio arraigo, no solo a aquellos con acuerdos con el Estado. A finales de año, el Estado no había aceptado la propuesta. Representantes de los Testigos de Jehová dijeron que preferían no solicitar su propia instrucción religiosa en los centros escolares, ya que creían que la formación religiosa es responsabilidad del individuo.

La educación sobre el Holocausto en el plan de estudios de Educación Secundaria continuó siendo según lo dispuesto en una orden del Ministerio de Educación recogida en dos reales decretos. El tema estaba incluido en una asignatura obligatoria de Geografía e Historia de cuarto curso y en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de primero. Seguía en vigor un acuerdo de 2017 entre la FCJE y el Ministerio de Educación para dar formación a los profesores sobre el Holocausto, el judaísmo y el antisemitismo, y el Centro Sefarad-Israel asumió la responsabilidad de su puesta en práctica.

En septiembre, un colegio de Vallecas comunicó a varias familias que sus hijos tenían que cursar la asignatura de religión católica en vez de la alternativa de valores sociales y cívicos que las familias habían elegido. El centro explicó que era necesario hacer modificaciones en los horarios para mantener a los alumnos en grupos burbuja debido a la pandemia de la COVID-19. Las familias se quejaron a la administración del centro alegando que la decisión vulneraba su derecho a no matricular a sus hijos en la asignatura de religión, tal como permite la ley.

El 21 de octubre, Santiago Abascal, diputado del Congreso y líder del partido opositor Vox, declaró en el Congreso durante su moción de censura contra el Gobierno que el islam era un “peligro” para las civilizaciones europeas y que “el yihadismo sigue decapitando al grito de Alá es grande”. Abascal también dijo que en Cataluña “ya se está más cerca del horror” que viven otros países europeos a causa del islam y predijo

que “si los renegados lograsen romper España”, crearían una “república islámica catalana”.

La campaña contra la COVID-19 del gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana comparó la lucha contra el virus con la conquista valenciana del rey Jaime I a los musulmanes en 1238. Varios partidos políticos criticaron la comparación y el gobierno autonómico retiró el texto el 9 de octubre. El presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig se disculpó por la campaña, que calificó de “impropia”.

En julio se filtraron unos audios en los que se escuchaba presuntamente a Juan Sergio Redondo, diputado del Congreso y líder de Vox en Ceuta, descalificando e insultando a musulmanes. Redondo también cargaba supuestamente contra el presidente de la ciudad por empezar “el rollito ese de la multiculturalidad” promoviendo actos públicos para la comunidad hindú. Vox emitió un comunicado en el que negaba que Redondo “hubiera hecho jamás una declaración pública en contra de la comunidad hindú” y añadió que “siempre ha dado muestra de un profundo respeto y consideración” por esa comunidad.

El 21 de julio, Silvia Orriols, regidora de Ripoll y exregidora del Front Nacional per Catalunya, fue acusada de un delito de odio por unos comentarios que hizo durante un pleno en enero oponiéndose a la apertura de una nueva mezquita y acusando a la Asociación Annour, que gestiona el templo, de “consentir el fanatismo religioso” y de “discriminar a las mujeres”.

En mayo, el Ayuntamiento de Calafell acordó de forma unánime denunciar al concejal Javier Álvarez por un delito de odio y otro de ofensa a los sentimientos religiosos. Álvarez, que fue expulsado de su partido Ciudadanos en abril, insultó públicamente en redes sociales a “aquellos que rezan a Alá”. El portavoz de Ciudadanos en Calafell condenó públicamente las palabras de Álvarez y se puso en contacto con los imanes de las mezquitas locales para pedir disculpas.

El senador del Partido Popular Rafael Hernando publicó el 27 de abril en su cuenta de una red social un vídeo que supuestamente mostraba una marcha de musulmanes por las calles saltándose el confinamiento decretado por el Gobierno durante el estado de alarma. En la publicación escribió: “O sea que si eres católico no puedes ir a la iglesia y se prohíbe la Semana Santa [...] pero si eres musulmán sales a la calle de manifestación, bien pegadito, sin mascarillas ni guantes”. Las imágenes correspondían a 2018. Hernando retiró el vídeo después de que varios medios de comunicación informaran de que el senador había difundido un bulo sobre los musulmanes.

En febrero, el grupo Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía solicitó a la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta que reabriera un caso de delitos de odio contra varios miembros de Vox por unos mensajes aparecidos en un chat grupal y descritos como “xenófobos, islamófobos y racistas”. En el supuesto chat grupal —en el que participaron el diputado Juan Sergio Redondo, el portavoz en la Asamblea local Carlos Verdejo y los concejales Francisco Ruiz y Ana Belén Cifuentes— se hacía mención a la “islamización de Ceuta” y a la “palestinación del territorio” y se llamaba “moros” a los musulmanes. Los implicados aseguraron que el chat había sido manipulado.

El Ministerio de Justicia continuó tramitando solicitudes en aplicación de la ley que permitía a los descendientes de los sefardíes expulsados del país hace 500 años adquirir la nacionalidad española con la condición de que las solicitudes se presentaran antes de septiembre de 2019, el último mes de vigencia de la ley. Desde 2015, el Gobierno recibió un total de 132.226 peticiones, 72.000 de ellas durante el último mes. El Ministerio de Justicia tramitó casos de más de 60 países, ocupando Venezuela el primer puesto por número de solicitantes.

En agosto, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo revocó un fallo del Tribunal Militar Central que sancionaba y suspendía de empleo y sueldo a un suboficial musulmán que acusó a sus superiores de discriminación por no ascenderlo. El suboficial declaró que lo habían tratado con hostilidad y cinismo y presentó escritos en los que sostenía que le habían calificado como “no apto” para el ascenso por ser musulmán.

En enero, el rey Felipe VI representó a España en un acto conmemorativo en Jerusalén donde se rindió homenaje a las víctimas del Holocausto con motivo del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. El rey, que ostenta el título honorífico de rey de Jerusalén, afirmó que “no hay lugar para la indiferencia ante el racismo, la xenofobia, el discurso del odio y el antisemitismo”. La presidenta del Senado, Pilar Llop, presidió el 27 de enero un acto solemne con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, al que asistieron la vicepresidenta Calvo, la ministra de Educación Isabel Celaá, diputados y senadores, miembros de los cuerpos diplomáticos y miembros de la comunidad judía, entre otros. El acto contó con los testimonios del entonces presidente de la FCJE Isaac Querub y de Ita Bartuv, superviviente del Holocausto. El 5 de mayo, la vicepresidenta Calvo presidió una ceremonia en homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos de concentración nazis, y el Consejo de Ministros aprobó una declaración institucional reconociendo el “legado democrático y ético” que dejaron.

Tras mantener una reunión el 20 de julio con la FCJE, la vicepresidenta Calvo anunció el 22 de julio que el Gobierno respaldaba la adhesión de España a la definición operativa de “antisemitismo” de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) aprobada en 2016 bajo el mandato del anterior Gobierno. Por otra parte, en junio el Parlamento de las Islas Baleares decidió adoptar la definición operativa de antisemitismo de la IHRA. En septiembre, la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya alertó de la necesidad de luchar contra el antisemitismo y el totalitarismo durante su participación en una celebración del Rosh Hashana en el Centro Sefarad-Israel de Madrid. La ministra concluyó la ceremonia recalando que la decisión de refrendar la definición operativa de “antisemitismo” de la IHRA “no se había tomado a la ligera, sino que era el resultado del compromiso de luchar contra el antisemitismo en todas sus facetas y contra el totalitarismo, dos fenómenos que nos amenazan”.

Según estimaciones de la FCJE, en el país residen muy pocos supervivientes del Holocausto; la federación dijo que por ese motivo el Gobierno consideraba la restitución de propiedades únicamente caso por caso. La FCJE no informó de ningún

caso de restitución durante el año. El 18 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos confirmó la resolución judicial que declaraba que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza española es la legítima propietaria del cuadro *Rue Saint-Honoré* de Camille Pissarro. La familia de Lilly Cassirer, una judía que huyó de Alemania en 1939, interpuso una demanda en Estados Unidos alegando que oficiales nazis se incautaron del óleo en 1939 y que en 1993 fue incorporado a la colección del Museo Thyssen, tras una adquisición privada en 1976 por el benefactor del museo. En abril de 2019, un juez estadounidense falló a favor del Museo Thyssen, concluyendo que era el legítimo propietario del cuadro y que, según la legislación española, los compradores conservan las obras adquiridas si no tenían “conocimiento fehaciente” de que dichas obras eran robadas. La familia apeló la resolución judicial.

La justicia continuó fallando en contra de resoluciones de gobiernos municipales y provinciales que apoyaban el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel. Dichas resoluciones generalmente suponían una declaración no vinculante que apelaba al Gobierno central a apoyar “cualquier iniciativa propuesta por la campaña internacional de BDS” y a suspender las “relaciones con Israel hasta que el país cese sus políticas criminales y represivas contra la población palestina”. Además, algunos actos legislativos en favor del movimiento BDS contenían lenguaje en apoyo de un “espacio libre del apartheid israelí”. El 20 de febrero, la Asamblea de Madrid aprobó una declaración institucional condenando “cualquier muestra de discriminación, incitación al odio o violencia y demás formas de racismo y xenofobia contra los judíos”. El Parlamento de Cataluña adoptó una medida similar en enero y el 15 de octubre aprobó una resolución condenando explícitamente el BDS. El 3 de septiembre, un juzgado de Santander anuló las declaraciones de los municipios de Torrelavega y Cabezón de la Sal como “espacios libres de apartheid israelí”, que habían aprobado ambos consistorios en 2017 y 2016 respectivamente. El juez consideró que las declaraciones no eran acuerdos genéricos y programáticos y que “excedían de una mera declaración de principios y de los problemas locales concretos de los vecinos, lo que supone arrogarse competencias internacionales de las que el Ayuntamiento carece”.

La Fundación Pluralismo y Convivencia realizó varias campañas de divulgación, incluidos eventos virtuales, con el objetivo de promover un mayor conocimiento de las distintas religiones y el respeto de la libertad de culto. Continuó colaborando con entidades religiosas en tres grupos de trabajo para la apertura y gestión de lugares de culto, el impacto de la educación religiosa, y los efectos de la discriminación y la limitación de la libertad religiosa en el lugar de trabajo. Durante el año, dotó a la FEREDE con 462.800 euros (568.000 \$), a la CIE con 330.000 euros (405.000 \$), y a la FCJE con 169.405 euros (208.000 \$). La Subdirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia mantuvo un portal en línea para informar y ayudar a nuevos inmigrantes y a ciudadanos que se trasladaban a otra comunidad a encontrar su comunidad religiosa y su lugar de culto locales entre los inscritos en el registro. La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior prestó asistencia a las víctimas de delitos de odio por motivos religiosos y ofreció formación a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Varias administraciones públicas regionales y municipales llevaron a cabo campañas de concienciación para promover la diversidad religiosa. Por ejemplo, la Dirección General de Asuntos Religiosos del gobierno autonómico catalán orientó y apoyó económicamente a las comunidades religiosas y difundió información sobre la diversidad de religiones. La Oficina de Asuntos Religiosos y la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona apoyaron a varios grupos religiosos facilitando y promoviendo celebraciones religiosas, concediendo subvenciones para sus proyectos y organizando mesas redondas sobre la libertad de culto en la ciudad. El Ayuntamiento también organizó talleres y eventos formativos para la lucha contra el sentimiento antimusulmán dirigidos a funcionarios municipales, profesores, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y organizaciones de derechos humanos.

El Gobierno español es miembro de la IHRA.

Sección III. Respeto de la libertad religiosa por parte de la sociedad

Según el OLRC, en los nueve primeros meses del año hubo 181 incidentes que describió como vulneraciones de la libertad religiosa, seis más que en el mismo periodo de 2019. Según las estadísticas del OLRC, que incluyen informes de medios de comunicación, el número de incidentes ha ido aumentando cada año desde 2014. De los incidentes mencionados, 136 fueron contra cristianos, seis contra musulmanes, tres contra judíos y 36 contra todas las confesiones. Hubo dos casos de violencia (agresiones contra católicos), 26 ataques a lugares de culto, 70 casos de acoso y 83 casos de “marginación de la religión de la esfera pública”. Según el informe anual de 2019 del OLRC publicado en junio, Andalucía fue la comunidad autónoma con más ataques a la libertad religiosa durante ese año, seguida de Madrid y Cataluña.

De acuerdo con el Informe de 2019 sobre delitos de odio elaborado por el Ministerio del Interior, el último disponible, durante ese año se registraron 66 delitos de odio basados en creencias o prácticas religiosas y, por otro lado, cinco con motivaciones antisemitas, en comparación con 69 y 8 delitos en dichos ámbitos respectivamente durante 2018. Únicamente se desglosan los delitos de antisemitismo, pues aparecen tipificados específicamente como infracciones en el Código Penal. La mayoría de los delitos con motivaciones religiosas sucedieron en Cataluña (17 delitos de odio por creencias religiosas, tres específicamente por antisemitismo), seguida de Madrid (8, 1), País Vasco (8, 0) y Andalucía (7, 0). El informe del Ministerio del Interior no citaba ejemplos concretos ni desglosaba los incidentes por motivos religiosos en función del tipo de delito. Según explicó un miembro del ministerio, las cifras del informe anual solo reflejan los datos de denuncias oficiales, no incluyen informes de los medios de comunicación.

De acuerdo con la Memoria Anual de 2019 de la Fiscalía General del Estado, durante ese año se incoaron siete procedimientos judiciales por delitos de odio relacionados con la religión, en comparación con los 16 de 2018; y se dictaron dos sentencias por delitos contra los sentimientos religiosos.

En junio, la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona pidió

cinco años de cárcel para tres neonazis que agredieron a un vendedor sij en la ciudad condal en 2017. Se acusó a los agresores de robo con violencia e intimidación, con el agravante de actuar por motivos discriminatorios. Se trata de la primera denuncia del Ministerio Público por un delito de odio contra un sij.

En julio, la policía autonómica de Cataluña detuvo a un hombre acusado de intentar quemar un oratorio musulmán en Manlleu, y a otro hombre por agredir al presunto pirómano con un arma blanca en venganza.

En mayo, la policía detuvo en Esplugues de Llobregat a un hombre por incitar al odio, la violencia y la discriminación tras proferir durante un programa de radio con gran seguimiento entre la comunidad marroquí tanto en España como en Marruecos que una profesora marroquí y activista de los derechos de la mujer sería decapitada si viviera en otro país a causa de sus creencias políticas y por faltar al respeto al Profeta Mohamed. La Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona activó una investigación y la policía incoó un expediente administrativo de expulsión, ya que el hombre vivía en España de manera irregular.

El 14 de octubre comenzó el juicio de una mujer acusada de ofender los sentimientos religiosos. La Fiscalía pidió sancionar a la mujer con una multa de 3000 euros (3700 \$) por participar en una exhibición pública por el Día de la Mujer en marzo de 2013 en la que ella y otras personas no identificadas caminaron por las calles de Málaga a modo de procesión con una gran vagina de plástico ataviada como si fuera la Virgen María, lo cual la acusación pública consideró que “pretendía hacer mofa de los símbolos y dogmas más sagrados para quienes profesan la religión católica”. La denuncia la presentó originariamente la Asociación Española de Abogados Cristianos, que pedía un año de prisión y 24 meses de multa. En noviembre se emitió la sentencia, que impuso a la mujer una multa de 2700 euros (3300 \$). La condenada dijo que recurriría el fallo.

El 9 de septiembre, representantes de Netflix en España comparecieron ante un juzgado de Colmenar Viejo para testificar con motivo de una querrela presentada contra la empresa por la Asociación Española de Abogados Cristianos por considerar que la película satírica brasileña *La primera tentación de Cristo*, emitida en diciembre de 2019 en España, ofendía los sentimientos religiosos. La Asociación Española de Abogados Cristianos manifestó que el filme presentaba a Jesucristo como “inepto y homosexual” y pedía que Netflix lo retirara de su plataforma de contenidos en línea. A finales de año, el juzgado aún no había emitido un fallo.

El 21 de febrero, un juzgado de Madrid absolvió a Willy Toledo de los delitos de obstrucción a la justicia y contra los sentimientos religiosos, una decisión ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid el 21 de noviembre. La Asociación Española de Abogados Cristianos había presentado una querrela contra Toledo por considerar que los comentarios que este publicó en sus redes sociales en 2017 insultaban a Dios y a la Virgen. En el fallo, la jueza indicó que los comentarios fueron “de mal gusto”, pero determinó que la manera en que se habían publicado en la cuenta personal de Toledo no constituía un delito.

En enero, la Universidad de Lleida anunció que revisaría sus políticas antidiscriminatorias después de que una estudiante de cuarto año de Enfermería fuera expulsada de uno de sus centros por negarse a quitarse el hijab. La universidad reubicó a la estudiante en otro centro.

Un representante del Movimiento contra la Intolerancia, una ONG sin afiliación religiosa que recopila casos de delitos de odio por motivos religiosos, comunicó que se había registrado un aumento en los discursos de odio con motivaciones religiosas contra judíos, cristianos y musulmanes en redes sociales. El Observatorio de Antisemitismo de la FCJE y el Movimiento contra la Intolerancia observaron un aumento en los discursos antisemitas que circulaban por redes sociales, como, por ejemplo, culpar a los judíos de crear la pandemia de la COVID-19.

En mayo, la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta condenó a un hombre por un delito de incitación al odio contra Israel y las comunidades judías a través de redes sociales a un año de prisión (condena suspendida por carecer de antecedentes penales), una multa e inhabilitación durante tres años para ejercer oficios vinculados al ámbito educativo y deportivo.

En febrero, en varias celebraciones de Carnaval, algunos participantes se disfrazaron de nazis y víctimas del Holocausto durante los desfiles por la ciudad. En Badajoz, una comparsa de 160 personas desfiló disfrazados la mitad de ellos de soldados nazis y la otra mitad de presos de los campos de concentración, marchando y bailando al ritmo de una coreografía de música pop. La decoración incluía un tanque, vallas metálicas y un estandarte con la esvástica y la estrella de David que señalaba la puerta de entrada al campo de Auschwitz. En Campo de Criptana, otra comparsa de 130 integrantes se disfrazó de presos judíos, oficiales nazis y mujeres vestidas con el simbólico abrigo rojo de la película *La lista de Schindler*, bailando al son de música disco y recorriendo las calles con una carroza que mostraba una cámara de gas adornada con dos chimeneas de un crematorio. La Embajada de Israel condenó la comparsa de Campo de Criptana por hacer burla de los seis millones de judíos asesinados por los nazis. El Ayuntamiento de la ciudad emitió un comunicado condenando también lo sucedido. Ambos grupos de participantes declararon que su intención era homenajear a las víctimas del Holocausto.

En julio, la Asociación Marroquí de Derechos de los Inmigrantes (AMDI) de Puertollano presentó dos denuncias ante la Fiscalía provincial por presuntos delitos de odio perpetrados por tres personas que publicaron en redes sociales mensajes que según la AMDI “incitaban al odio contra la comunidad musulmana”. La AMDI sostuvo que los mensajes surgieron a raíz de que la asociación solicitara al Ayuntamiento destinar una parcela del cementerio para uso de la comunidad musulmana, en vista del aumento de muertes por la pandemia de la COVID-19. La AMDI citó mensajes que comentaban que había sitio para enterrar a musulmanes “en una cuneta”.

Un representante de la FCJE manifestó la preocupación del grupo por el aumento de las campañas de apoyo al BDS entre organizaciones de estudiantes universitarios. El representante de la FCJE dijo que en ocasiones las organizaciones estudiantiles

promovían actos que estaban más orientados a atacar a Israel y a los judíos que a apoyar la causa palestina. En mayo, el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana canceló los cursos programados que iba a impartir BDS País Valencià al profesorado acerca de antisemitismo e islamofobia después de que la FCJE y otras formaciones se quejaron de que el grupo promovía el odio y la discriminación contra los judíos. En septiembre, la FCJE y el Centro Simon Wiesenthal solicitaron la cancelación de un curso en línea ofrecido por la Universidad Pública de Navarra titulado “Apartheid en Palestina y la criminalización de la solidaridad”. El mencionado centro condenó la participación del líder del movimiento internacional BDS en el curso y dijo que podría incitar a cometer ataques contra las instituciones judías en España.

Hubo varios actos de vandalismo con motivaciones religiosas, y muchos de ellos se remitieron a los juzgados. En diciembre, la FCJE, la Comunidad Judía de Madrid y el Movimiento contra la Intolerancia condenaron y se comprometieron a emprender acciones legales contra los actos vandálicos cometidos en un cementerio judío de Madrid con pintadas que decían: “Judío bueno, judío muerto”. En septiembre, la Asociación Memoria Histórica de Cartagena denunció la realización de pintadas con la esvástica, la estrella de David y el texto “judíos fuera” en el monumento municipal dedicado a los republicanos cartageneros exiliados que fueron deportados a campos de concentración nazis. En julio, la policía malagueña detuvo a un hombre por profanar una capilla católica y herir a una mujer en las inmediaciones. También en julio, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan condenó las pintadas que aparecieron en tres edificios religiosos católicos con las palabras “fascistas”, “cristianismo” y “pandemia”. En junio, la Asociación Española de Abogados Cristianos presentó una querrela contra las personas que destruyeron la cabeza y las manos de la estatua de Jesucristo en La Roda. En marzo, un juzgado de Segovia abrió diligencias contra un grupo izquierdista por los actos vandálicos cometidos en una iglesia que apareció con pintadas en las que se podía leer: “Por la memoria histórica, contra el franquismo”. En enero apareció la pintada “comando matajudíos” junto a una esvástica en un edificio de la Universidad Alfonso X El Sabio en Villanueva de la Cañada. Y en un parque cercano se pintó otra esvástica junto al texto: “Palestina Libre. Mata a un judío”.

En septiembre, la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso (AUDIR), una ONG catalana, organizó su quinta “Noche de las religiones” en Barcelona, en la que 36 lugares de culto de 15 grupos religiosos diferentes abrieron sus puertas e invitaron a los residentes locales. Participaron más de 1200 personas en las actividades, que se llevaron a cabo tanto presencialmente como por Internet. La AUDIR continuó desarrollando su proyecto “Constructores de puentes”, en el que 30 jóvenes de diferentes confesiones asistieron a cursos sobre el diálogo interreligioso, entre otros temas. Como parte del programa, los participantes visitaron lugares de culto y centros docentes de su zona y dieron charlas sobre la diversidad religiosa a estudiantes y miembros de la comunidad.

Sección IV. Política y actividades del Gobierno de Estados Unidos

Representantes de la Embajada y del Consulado de Estados Unidos se reunieron con miembros del Gobierno para hablar de antisemitismo, islamofobia, anticlericalismo y asuntos relativos a la discriminación social hacia las minorías religiosas. Entre otros, hablaron del acceso a las licencias para los lugares de culto, la educación religiosa, los cementerios y los enterramientos, las pensiones, los delitos de odio por motivos religiosos y el discurso de odio. Diplomáticos de la Embajada también plantearon estos asuntos a los líderes religiosos participantes en la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Funcionarios de la Embajada y del Consulado se reunieron con líderes de grupos católicos, protestantes, musulmanes, judíos, Testigos de Jehová y budistas, así como con otros grupos religiosos y miembros de la sociedad civil, para debatir sobre las preocupaciones de los miembros de las comunidades acerca de la discriminación y el libre ejercicio de sus derechos religiosos.

En enero, la Embajada participó en varios eventos para conmemorar el Mes de la Memoria del Holocausto, entre ellos la colaboración con el Centro Sefarad-Israel para presentar un ciclo de cine sobre el Holocausto. Funcionarios de la Embajada se dirigieron al público antes de la proyección de *El otro señor Klein* y *El diario de Ana Frank*, destacando la necesidad de que la próxima generación conozca el Holocausto para así evitar atrocidades semejantes en el futuro.

En abril, el embajador estadounidense publicó varios mensajes en redes sociales conmemorando el comienzo del Ramadán y destacando la importancia de la libertad de culto y de la inclusión y el respeto hacia las comunidades religiosas minoritarias. Los mensajes del embajador subrayaron el compromiso de Estados Unidos con la tolerancia y la convivencia en todo el mundo. En lugar de celebrar la fiesta anual del iftar, el embajador envió cartas personales a líderes de grupos religiosos, organismos públicos, misiones diplomáticas y ONG conmemorando el Ramadán y promoviendo la diversidad religiosa y la tolerancia. El cónsul general de Estados Unidos en Barcelona también promovió la libertad de culto y la diversidad religiosa por redes sociales durante todo el año.